Plaza pública

Miguel Angel Granados Chapa

► *Agresión al reportero Altamira*

► *Lenta justicia en Nuevo León*

El todavía flamante gobierno de don Alfonso Martínez Domínguez en Nuevo León puede no aprobar el primer *test* importante al que se enfrenta, relacionado con asuntos de violencia y justicia, a los que el gobernador debería ser muy sensible.

El 15 de septiembre pasado, el reportero de policía de *El Diario de Monterrey*, Manuel Altamira Peláez, fue conducido a un bar mediante un ardid, y allí fue golpeado de manera tan brutal que hoy mismo sigue, más de tres semanas después, hospitalizado a causa de las fracturas que la agresión le produjo. Para además de todo vejarlo, sus golpeadores volcaron sobre la cabeza del reportero una bolsa llena de excremento humano.

El propio Altamira denunció a sus verdugos. Se trata de un abogado con temibles antecedentes, Leopoldo del Real Ibáñez o Leopoldo Correa Ibáñez, como también se hace llamar. Altamira había publicado en el cotidiano en que trabaja varias denuncias contra Del Real, y éste quiso hacerle una advertencia. La próxima vez sería peor, amenazó al reportero durante la golpiza misma.

Como es obvio, el caso ha conmovido a la opinión regiomontana, que conoce bien a los protagonistas de los hechos. Por un lado, Altamira es un terco creyente en la dignidad de su oficio. A principios de 1977 formó parte del equipo que siguió al periodista Fernando Cantú cuando éste abandonó la dirección de *Tribuna* para no admitir que ese diario regiomontano fuese dirigido por el ex secretario de Gobernación, Moya Palencia, designado por aquellos días director general de la antigua cadena "de los soles", la del coronel García Valseca. Con ese grupo, Altamira participó en una hermosa aunque fallida aventura editorial, que consistió en publicar durante un efímero periodo una revista titulada *Crónica*, dirigida por Cantú. Luego, Altamira pasó al *Diario* y allí se ha significado por la honddura que quiere dar a su trabajo noticioso.

Del Real, en cambio, ha agredido al fiscal

federal Pedro Neyra; a los hermanos Castillo, dirigentes de la federación cetemista local; al abogado Horacio Moyer Quintanilla, etcétera. Horas después de haber golpeado y hecho golpear al reportero Altamira, tuvo un fuerte altercado, por razones diversas, con un comandante de la Policía Judicial Federal, Luis Manuel Mendoza Romero.

No obstante todo, se ha notado una peculiar lentitud en la persecución de este delito. El gobernador Martínez Domínguez visitó en el hospital Mugerza al periodista agredido, más de una semana después del atentado. Aprovechó para hacer un discurso sobre la libertad de prensa, y anunció que la agresión no quedaría impune. Sin embargo, el procedimiento se inició con escrúpulos legales sorprendentes. Se giraron tres invitaciones para que Del Real acudiera a declarar, que por supuesto fueron desoídas por el citado. Rasgándose las vestiduras y proclamando su inocencia, escribió una carta a los periódicos regiomontanos anunciando que comparecería el martes 2 de octubre y no lo hizo. Finalmente, el jueves de la semana pasada se presentó a formular su declaración preparatoria, pues al fin se dictó orden de aprehensión contra él. Naturalmente, no quedó detenido, pues cuenta con un amparo.

La opinión regiomontana teme que la agresión a Altamira permanezca sin castigo, porque Del Real está emparentado con el licenciado Alejandro Garza Delgado, que es de las confianzas del gobernador. Además, Del Real es un pato que le tira a las escopetas: en su preparatoria contracusó a Altamira de serios delitos: el reportero, según su golpeador, "ha hecho o ha participado en movimientos izquierdistas en contra del gobierno del estado". Eso lo supo porque realizó "investigaciones personales sobre los hechos que se le atribuyen" (*El Norte*, 5 de octubre).

A ver si es cierto que, como le dijo Martínez Domínguez a Altamira, "nada que atente contra de ella (la libertad de prensa) lo permitirá el gobierno".